



Asamblea General

Distr. limitada
14 de febrero de 2014
Español
Original: español/inglés

**Reunión Preparatoria Regional de América Latina y
el Caribe para el 13º Congreso de las Naciones Unidas
sobre Prevención del Delito y Justicia Penal**
San José, 19 a 21 de febrero de 2014

Proyecto de informe

Relator: Edward Belfort (Suriname)

Informe de la Reunión Preparatoria Regional de América Latina y el Caribe para el 13º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, celebrada en San José del 19 al 21 de febrero de 2014

I. Introducción

1. En su resolución 56/119, relativa al cometido, la función, la periodicidad y la duración de los congresos de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, la Asamblea General decidió que cada congreso fuera precedido de reuniones preparatorias regionales; también decidió denominarlos congresos de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y justicia penal.
2. El Grupo Intergubernamental de Expertos encargado de examinar la experiencia adquirida en los congresos de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y justicia penal, que se reunió en Bangkok del 15 al 18 de agosto de 2006, subrayó la importancia de las reuniones regionales preparatorias como instrumento fundamental para la preparación de los congresos y como forma de incorporar las preocupaciones y perspectivas regionales en esos preparativos. El Grupo observó que, a pesar de la globalización y del carácter cada vez más transfronterizo de la delincuencia, las distintas regiones del mundo seguían teniendo preocupaciones diferentes que querían que se reflejaran adecuadamente en la consideración de los distintos temas en los congresos (E/CN.15/2007/6, párr. 23).
3. En su resolución 67/184, la Asamblea General solicitó al Secretario General que facilitara la organización de las reuniones preparatorias regionales del 13º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal



y que, conforme a la práctica establecida y en consulta con los Estados Miembros, proporcionara los recursos necesarios para la participación de los países menos adelantados en esas reuniones y en el 13º Congreso propiamente dicho. La Asamblea General alentó a los programas de las Naciones Unidas, los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes, así como a otras organizaciones profesionales, a que cooperaran con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en los preparativos del 13º Congreso.

4. En la misma resolución, la Asamblea General solicitó al Secretario General que, en colaboración con los institutos de la red del programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, preparase una guía para las deliberaciones de las reuniones preparatorias regionales del 13º Congreso y para el Congreso con tiempo suficiente para que dichas reuniones pudieran celebrarse lo antes posible en 2014, e invitó a los Estados Miembros a que participaran activamente en esa labor. En su 22º período de sesiones, la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal examinó un proyecto de guía para las deliberaciones. En su resolución 68/185, de 17 de octubre de 2013, la Asamblea General tomó nota con aprecio del proyecto de guía para las deliberaciones y solicitó al Secretario General que diera forma definitiva a la guía para las deliberaciones, teniendo presentes las recomendaciones formuladas por la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, así como las observaciones y comentarios adicionales de los Estados Miembros, con tiempo suficiente para que las reuniones preparatorias regionales del 13º Congreso pudieran celebrarse lo antes posible en 2014. La versión definitiva de la guía para las deliberaciones (A/CONF.222/PM.1) se publicó en julio de 2013.

5. En su resolución 67/184, la Asamblea General alentó, además, a los gobiernos a que emprendieran los preparativos del 13º Congreso con antelación y por todos los medios adecuados, incluso, cuando procediera, creando comités preparatorios nacionales. La Asamblea instó a los participantes en las reuniones preparatorias regionales a que examinaran los temas sustantivos del programa y los temas de los seminarios del 13º Congreso y formularan recomendaciones orientadas a la acción que sirvieran de base de los proyectos de recomendaciones y de conclusiones que se someterían al examen del Congreso. En su resolución 68/185, la Asamblea General instó a los gobiernos a que invitaran a sus representantes a que lo hicieran y a que participaran activamente en las reuniones preparatorias regionales, cuando procediera.

II. Conclusiones y recomendaciones

6. La Reunión Preparatoria Regional de América Latina y el Caribe para el 13º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal convino en que las recomendaciones orientadas a la acción presentadas más adelante reflejaban las perspectivas de América Latina y el Caribe, por lo que debían tenerse en cuenta cuando se preparara el proyecto de declaración para presentar al Congreso.

7. En la Reunión se destacó que la coordinación interinstitucional era un factor decisivo para la eficiencia y eficacia de las políticas en materia de ejecución de la ley y justicia penal.
8. También se subrayó la importancia de unos programas nacionales amplios e inclusivos de aplicación de las políticas de prevención del delito y justicia penal, que abarcaran no solo los aspectos relativos a la seguridad, la justicia y el mantenimiento del estado de derecho, sino también los relacionados con la promoción de la paz y la inclusión social.
9. Los participantes en la Reunión señalaron además que el exceso de publicidad de las causas criminales en la fase previa al juicio podía tener efectos perjudiciales para la protección de los derechos humanos fundamentales (por ejemplo, la presunción de inocencia), así como para la protección de los menores involucrados en procesos penales.
10. En la Reunión se recomendó que se elaborara un código penal modelo para armonizar las leyes nacionales con miras a promover la cooperación internacional en la lucha contra diversas formas de delincuencia y para homologar las sanciones penales aplicables.
11. En la Reunión se destacó la conveniencia de impulsar el establecimiento de mecanismos de justicia alternativa (mediación) y servicios previos al juicio para atender a los intereses de las víctimas, fortalecer el principio de presunción de inocencia en los procesos penales y procurar una rápida reinserción del delincuente, haciéndolo responsable frente a la sociedad, y evitar la sobreutilización de los sistemas penitenciarios.
12. También se destacó la necesidad de establecer la vinculación de la justicia restaurativa con la justicia que merecía la víctima, mediante la aplicación de modelos de atención y mecanismos ágiles que hicieran efectivos los derechos humanos de las víctimas, y por otro lado buscar la aplicación de penas alternativas a los delincuentes.
13. Por otra parte, se señaló la necesidad de fortalecer los sistemas de justicia penal, la capacitación de los funcionarios y los institutos de ciencias forenses a fin de garantizar el carácter científico de las investigaciones de los delitos y las comprobaciones correspondientes, evitando la impunidad y garantizando el respeto a los derechos humanos de los involucrados.

A. Temas sustantivos

1. Tema 3 del programa del Congreso: Éxitos y problemas en la aplicación de políticas y estrategias amplias de prevención del delito y justicia penal para promover el estado de derecho a nivel nacional e internacional y para apoyar el desarrollo sostenible

14. En la Reunión se afirmó que las deliberaciones del 13º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal debían orientarse conforme a lo acordado en el marco del 12º Congreso en lo que se refería a la necesidad de respetar y proteger los derechos humanos y las libertades

fundamentales en la prevención del delito y la administración de justicia, y el acceso a la justicia, incluida la justicia penal.

15. En la Reunión se reafirmó la convicción de que el desarrollo sostenible y el estado de derecho se reforzaban mutuamente, como se había plasmado en el párrafo 7 de la Declaración de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre el Estado de Derecho en los Planos Nacional e Internacional.

16. Además, en la Reunión se recordó la influencia positiva y recíproca existente entre el desarrollo económico y social sostenible a largo plazo y el establecimiento de un sistema de justicia penal eficiente, efectivo y humano que funcionara correctamente, tal como se señalaba en la Declaración de Salvador sobre Estrategias Amplias ante Problemas Globales: los Sistemas de Prevención del Delito y Justicia Penal y su Desarrollo en un Mundo en Evolución, firmada en el 12º Congreso.

17. En ese contexto, se recordó la Declaración de San Salvador sobre Seguridad Ciudadana en las Américas, aprobada en 2011, en la que se reconocía que “las condiciones de seguridad pública mejoran mediante el pleno respeto a los derechos humanos, a las libertades fundamentales, así como la promoción de la educación, de la cultura, de la salud y del desarrollo económico y social” y que “se deben fomentar y fortalecer políticas de estado de largo plazo e integrales en materia de seguridad pública que garanticen la protección y la promoción de los derechos humanos, haciendo énfasis en enfrentar las causas de la criminalidad y la violencia”.

18. En ese sentido, se señaló que la promoción del desarrollo, la lucha contra la pobreza y la desigualdad social, y las políticas públicas sociales, por ejemplo en materia de educación y salud, conjuntamente con la participación social, contribuían a la prevención del delito y al fortalecimiento del estado de derecho y de la seguridad.

19. Respecto de la relación existente entre el estado de derecho y el desarrollo de los países, estaban estrechamente relacionados y se reforzaban mutuamente la seguridad, las garantías procesales y el respeto de los derechos de las personas. El sistema de justicia penal ocupaba un lugar cada vez más destacado en el estado de derecho y, al mismo tiempo, tenía un papel clave en la consolidación de la seguridad de los países.

20. En la Reunión se reconoció la importancia de la seguridad, la justicia, los derechos humanos y el estado de derecho como condiciones que propiciaban el crecimiento sostenible y equitativo y que constituían una parte esencial de dicho crecimiento. También se reconoció lo fundamentales que eran las cuestiones de prevención del delito y justicia penal para el estado de derecho y, por consiguiente, para el desarrollo social y económico. Desde esa perspectiva, los participantes en la Reunión destacaron la necesidad de incluir en el proceso de formulación de la agenda para el desarrollo después de 2015 objetivos separados con respecto al estado de derecho, la seguridad y los derechos humanos, incluidos elementos de prevención del delito y justicia penal; la buena gobernanza y la protección contra la violencia.

21. En la Reunión se recordó que los programas de prevención del delito estaban sólidamente implantados en la mayoría de los países y se habían centrado en los aspectos individuales, comunitarios o relativos a distintos tipos de relaciones con

diferentes grados de eficacia. A ese respecto, se destacó la importancia de seguir promoviendo el uso de instrumentos de evaluación y nuevas metodologías para medir la eficacia de los programas de prevención del delito a nivel nacional y alentar su aplicación a nivel regional, incluida la medición relativa al estado de derecho, la buena gobernanza, la violencia, la prevención del delito y la justicia penal y la elaboración de los indicadores correspondientes.

22. También se recordó que la protección y el mantenimiento de la paz, el orden y los derechos humanos deberían considerarse una prioridad fundamental. A ese respecto, debían hacerse todos los esfuerzos posibles por prevenir los conflictos violentos, incluso mediante actividades de mediación y programas de solución de conflictos y justicia restaurativa, en un espíritu de solidaridad y comprensión mutua.

23. En la Reunión se recomendó que se prestara más atención al papel que podían desempeñar la educación y la orientación, en todos los niveles de enseñanza, para inculcar valores compartidos sobre la importancia del estado de derecho y la protección de los derechos humanos y contribuir a la prevención del delito.

24. Los participantes en la Reunión recomendaron que se incluyeran elementos de las políticas y estrategias de prevención del delito y justicia penal para promover el estado de derecho en las evaluaciones comunes para los países de las Naciones Unidas, el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y sus correspondientes planes de acción y planes de trabajo, los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza y demás marcos de asistencia para el desarrollo que pudieran crearse. También recomendaron que, teniendo en cuenta el estrecho vínculo existente entre la prevención del delito y la justicia penal y el desarrollo sostenible, se incluyeran indicadores de seguridad y justicia en el índice de desarrollo humano a fin de alentar a los Estados a consolidar sus esfuerzos en ese ámbito.

25. Reconociendo la importancia de la recopilación y el análisis de datos, los participantes en la Reunión también recomendaron que los Estados elaboraran estrategias de base empírica en relación con el estado de derecho, la prevención del delito y la reforma de la justicia penal, basándose en datos y estadísticas nacionales desglosados por sexo y edad sobre la delincuencia y sus víctimas, y que incluyeran esas estrategias en los planes nacionales de desarrollo y los presupuestos estatales, fijando metas y objetivos concretos de reducción de la delincuencia, reinserción de los infractores y las víctimas y prevención del delito.

26. En la Reunión se instó a los países de la región a que incluyeran en los planes nacionales sobre las cuestiones de género y el adelanto de las medidas para facilitar el acceso de la mujer a la justicia penal.

27. En la Reunión también se reconoció la necesidad de que los Estados Miembros integraran las cuestiones que afectaban a los niños en su labor general relativa al estado de derecho, prestaran especial atención a la cuestión de la justicia de menores y tuvieran en cuenta las normas y reglas aplicables de las Naciones Unidas sobre el tratamiento de los niños de quienes se alegara que hubieran infringido las leyes penales o a quienes se acusara o declarara culpables de haber infringido esas leyes, en particular los niños privados de libertad, y de los niños víctimas y testigos de delitos, teniendo en cuenta también los aspectos relacionados con el género, las circunstancias sociales y las necesidades de desarrollo de esos niños. También se recomendó que los Estados Miembros formularan y aplicaran una política

exhaustiva en materia de justicia de menores y que asignaran recursos suficientes para la aplicación de esa política.

28. En la Reunión se reconoció la importancia de fortalecer la capacidad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para afrontar las nuevas formas de delincuencia y modos de operación de los grupos delictivos y se destacó la necesidad de mejorar las respuestas de los órganos encargados de hacer cumplir la ley y de justicia penal ante las situaciones que se les planteaban en ese contexto.

29. Los participantes en la Reunión reconocieron que la prevención era un instrumento fundamental en las estrategias orientadas a luchar contra la delincuencia organizada transnacional y basadas en programas de inclusión social y económica para reducir la desigualdad social, el hambre y la pobreza, especialmente en los grupos de población más vulnerables, como los jóvenes, los niños, los indígenas y las personas de ascendencia africana. Se recomendó que, al formular y aplicar políticas y estrategias nacionales amplias en materia de prevención del delito y justicia penal, los Estados de la región consideraran la posibilidad de aplicar medidas de revisión o reforma de los mecanismos informales de justicia y tuvieran en cuenta la función que desempeñaban esos mecanismos para facilitar el acceso de las personas a la justicia y la reparación, especialmente de las poblaciones indígenas y demás grupos vulnerables. Además, se subrayó la necesidad de asignar recursos financieros suficientes a fin poder aplicar eficazmente los programas, políticas y estrategias de prevención del delito y justicia penal, incluso en el ámbito penitenciario y de la reinserción.

30. En la Reunión se recomendó que en todos los tribunales penales se estableciera un sistema computarizado que hiciera posible que las partes involucradas en procesos penales siguieran todas las etapas de su proceso.

31. En la Reunión se recomendó que el enfoque integral de la prevención del delito y la justicia penal incluyera a los poderes judiciales de cada país en la elaboración de políticas, estrategias y programas de prevención del delito, sobre todo cuando se tratara de personas menores de edad en conflicto con la ley, mujeres víctimas de delitos y personas en situación de vulnerabilidad.

32. Los participantes en la Reunión recomendaron que se promoviera la formulación de políticas de Estado que fueran integrales en tanto atendieran los diferentes componentes del sistema de administración de justicia: control y represión del delito, prevención de la violencia, políticas de rehabilitación y reinserción social y atención a las víctimas de la violencia. Para esta construcción de política de Estado se recomendó promover procesos de participación ciudadana y comunitaria para alcanzar acuerdos de largo plazo con actores políticos, sociales y de los tres poderes del Estado.

33. Los participantes en la Reunión propugnaron que se elaborara una política de prevención de la violencia y el delito centrada sobre todo en los jóvenes, que les presentara nuevas oportunidades, evitando así que terminaran relacionados con la criminalidad y en particular la droga. Se recomendó a los Estados que esas oportunidades se dieran en el campo educativo, formal e informal, pero también en relación con el buen uso del tiempo libre, con iniciativas en torno al deporte, la cultura, el arte y la recreación necesarias para poder integrar e incluir de la mejor manera a los jóvenes en las sociedades; que se impulsaran técnicas de mediación y resolución pacífica de conflictos para la promoción de una cultura de paz,

de manera que las personas aprendieran a enfrentar y resolver sus problemas mediante la comunicación y el diálogo, evitando así posibles situaciones que pudieran derivar en violencia, sobre todo en espacios comunales; que se instara a los Estados Miembros a analizar y debatir sobre la necesidad de homologar las cualificaciones de los funcionarios y agentes penitenciarios a los niveles ya reconocidos de los otros agentes de seguridad civil armada de los Estados, con la finalidad de dignificar y profesionalizar la función penitenciaria; que se implementara la carrera penitenciaria, a efectos de generar dignificación, estabilidad, continuidad e identidad institucional en los funcionarios y el personal penitenciario en general.

34. En la Reunión se invitó a los Estados a que destinaran recursos suficientes para asegurar los procesos de dignificación, formación y profesionalización del personal penitenciario en general, orientando todo conforme a las perspectivas del más amplio respeto a los derechos humanos y de género, respetando toda resolución vinculada a esos ámbitos.

35. En la Reunión se hicieron las siguientes recomendaciones:

- establecer un sistema de justicia penal de menores especializado que hiciera especial hincapié en el tratamiento y atención de los jóvenes que hubieran entrado en conflicto con la ley;
- establecer un sistema de remisión a otros servicios y de mecanismos alternativos para tratar a los jóvenes que hubieran cometido faltas o delitos menos graves;
- estudiar medidas sustitutivas del encarcelamiento, centrando la atención en intervenciones terapéuticas basadas en tribunales, como los tribunales de menores y los tribunales especializados en menores necesitados de tratamiento contra la drogodependencia;
- estudiar vías para lograr una reforma sustancial del sistema de justicia de menores;
- cumplir los tratados internacionales y las normas internacionalmente convenidas, como la Convención sobre los Derechos del Niño, en lo que respectaba a las decisiones judiciales relativas a cuestiones que afectarían a los menores;
- promover programas de seguridad ciudadana que pudieran aplicarse para tratar las siguientes cuestiones:
 - a) la reducción de las tasas de homicidios y otros delitos graves, y la reducción del número de heridos por armas de fuego, con especial hincapié en la violencia relacionada con el uso de armas de fuego por jóvenes;
 - b) los malos tratos y abusos de menores;
 - c) la violencia doméstica; y
 - d) la delincuencia de menores;
- promover los programas e intervenciones alternativos de prevención del delito, incluidos los programas centrados en:
 - a) empoderar a los jóvenes mediante el deporte, la alfabetización y la orientación. A ese respecto, podían promoverse los programas de orientación a nivel nacional o integrarse en diversas instituciones, como los organismos nacionales de seguridad;

b) apoyar la creación de clubes juveniles de la policía como mecanismo para llegar a los jóvenes en los niveles primario y secundario;

c) orientar esas intervenciones en pro del aumento de la resiliencia psicosocial y la orientación de los jóvenes para que se convirtieran en ciudadanos más productivos y respetuosos de la ley.

37 *bis*. El acceso a la justicia y el respeto de las garantías procesales, así como el respeto de los derechos de las personas, se materializaban en la formación de defensores públicos con capacidad para cumplir su misión de ofrecer una defensa de calidad a toda persona imputada de un delito, con especial énfasis en las personas más vulnerables de la sociedad.

Para esos fines, todo Estado democrático debía asegurar que quienes debieran enfrentarse al sistema de justicia penal contaran con la información necesaria para el adecuado ejercicio de sus derechos y con asistencia letrada que les permitiera hacer valer esos derechos, como garantía de acceso a la justicia.

En el logro de esos objetivos, se debía avanzar hacia la autonomía de los defensores públicos como garantía de acceso a la justicia, apoyando el trabajo que se venía realizando a nivel regional.

Además de avanzar en la provisión de defensa letrada gratuita por defensores públicos para todas las personas, debía prestarse especial atención a los sectores más vulnerables de la sociedad, como las mujeres, los jóvenes, los migrantes y las poblaciones indígenas.

Sería importante que todos los Estados de la región promovieran, a su vez, la participación de los defensores públicos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a fin de que el derecho a la defensa técnica se ejerciera y garantizara desde la primera audiencia del procedimiento dirigida en contra de una persona a nivel nacional hasta, cuando procediera, la emisión de la sentencia por la Corte Interamericana de Derecho Humanos.

Seminario 1. La función de las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal en apoyo de sistemas de justicia penal eficaces, imparciales, humanos y responsables: experiencias y lecciones aprendidas al atender las necesidades singulares de las mujeres y los niños, en particular el tratamiento y la reinserción social del delincuente

36. En la Reunión se recomendó que la educación de las personas privadas de libertad se considerara una obligación ineludible de los Estados y que se garantizara en todo momento el acceso sin restricciones a diversos niveles de enseñanza formal a todos los presos, sin distinción de ningún tipo, así como el establecimiento de incentivos positivos para quienes estudiaban en prisión.

37. En la Reunión se instó a los Estados Miembros a que reafirmaran la necesidad de entender la detención preventiva y punitiva como medida de último recurso y se propuso que los Estados adoptaran mecanismos efectivos para asegurar que los juicios penales se desarrollaran sin demoras, que se aplicaran medidas sustitutivas del encarcelamiento y que las autoridades judiciales aplicaran los principios internacionales de derechos humanos de manera uniforme y sin restricciones al

imponer medidas de restricción de la libertad, con el objetivo de mantener las tasas de encarcelamiento a unos niveles que se ajustaran a la capacidad del sistema.

38. En la Reunión se alentó a los países a intercambiar información y buenas prácticas relativas a proyectos prometedores de reinserción social de presos, en particular mediante la educación a todos los niveles y el trabajo en los centros penitenciarios; seguir mejorando el proceso de selección, contratación, capacitación y evaluación del personal de dichos centros con un enfoque basado en la rehabilitación y la reinserción social; e intercambiar opiniones sobre modelos arquitectónicos para prisiones basados en los criterios de rehabilitación y reinserción, teniendo especialmente en cuenta las necesidades particulares de las mujeres y los niños que se encontraban en prisión.

39. En la Reunión se reconoció que en muchos países las instituciones penitenciarias se enfrentaban a problemas relacionados con la presencia de mujeres presas, entre ellas mujeres embarazadas o con hijos pequeños, y se invitó a los Estados Miembros a que adoptaran políticas y medidas pertinentes conformes con las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok). Reconociendo el problema particular que planteaban las presas extranjeras, que estaban en una situación de especial desventaja por diversas razones, puesto que normalmente recibían menos visitas y apoyo de sus familias, y que podían tener dificultad para entender el idioma o adaptarse a la cultura del otro país, y reconociendo que las mujeres que tenían hijos u obligaciones de cuidar a familiares mayores o discapacitados podían encontrarse en una situación más difícil dado que mientras esperaban ser juzgadas o cumplían su condena en el extranjero podía serles imposible saber cómo se encontraban sus familiares, la Reunión recomendó que los Estados Miembros formularan las orientaciones de política que correspondiera para afrontar esos casos de conformidad con las Reglas de Bangkok.

40. Los participantes en la Reunión se mostraron a favor de otorgar prioridad a las actividades de concienciación y de participación de la sociedad para hallar soluciones al hacinamiento en las prisiones y adoptar medidas eficaces de reinserción social y rehabilitación de los delincuentes para impedir que reincidieran. Por otra parte, invitaron a los Estados Miembros a que promovieran la aplicación de medidas alternativas, como la remisión a otros servicios y la justicia restaurativa, y aseguraran que se cumpliera el principio de que la privación de libertad de un menor fuera una medida que solo debía aplicarse como último recurso, durante el período más breve posible, y que se evitara la detención preventiva de menores siempre que se pudiera y se prestaran servicios y apoyo a los niños privados de libertad antes y después de su puesta en libertad a fin de promover su rehabilitación y su reinserción en la comunidad.

41. En la Reunión se recomendó:

- reconocer la problemática de la mujer como víctima de la violencia en todas sus formas, tanto en el ámbito público como en el privado, dentro de la delincuencia organizada y la delincuencia internacional;
- promover el reconocimiento y la tipificación penal de todas las formas de violencia contra la mujer;

aplicar una política encaminada a velar por la protección de las víctimas, prevenir la revictimización de los menores y las mujeres y garantizar medidas de reparación, acordes con las obligaciones de debida diligencia;

- informar a la sociedad civil y los medios de difusión de la importancia y pertinencia de aplicar medidas sustitutivas del encarcelamiento en el caso de los niños y los jóvenes. Se recomendó destacar los resultados satisfactorios de los programas de justicia restaurativa e invertir más recursos en programas de eficacia comprobada para reducir la reincidencia;

- alentar a los distintos Estados partes a crear en la fase de ejecución de las sanciones en el ámbito de la justicia penal de menores plazas especializadas y debidamente capacitadas de jueces, fiscales y defensores públicos;

- establecer plazos para las medidas cautelares no privativas de libertad en el tratamiento de la delincuencia de personas menores de edad;

- fortalecer la cooperación técnica a los Estados partes para la creación de un marco normativo nacional que respondiera al mandato del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire.

2. Tema 4 del programa del Congreso: Cooperación internacional, incluso a nivel regional, para combatir la delincuencia organizada transnacional

42. En la Reunión se recomendó que el Congreso exhortara a los Estados Miembros a que, de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones internacionales que habían asumido en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptaran criterios flexibles y prácticos en su labor de cooperación mediante la extradición y la asistencia judicial recíproca y otras modalidades de cooperación internacional, como la efectuada para fines de decomiso, incluidas la recuperación de activos y la cooperación para la detección y la lucha contra el blanqueo de dinero, las investigaciones conjuntas y la cooperación para hacer cumplir la ley. En la Reunión se recordó la importancia que tenían las citadas convenciones para fortalecer la cooperación internacional en el ámbito penal.

43. En la Reunión se recomendó que los Estados Miembros prestaran particular atención a la lucha contra la corrupción y los vínculos de esta con la delincuencia organizada transnacional y otras formas graves de delincuencia. A ese respecto, se destacó la importancia del Mecanismo de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, así como de la complementariedad de esta última con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. Además, en la Reunión se invitó a los Estados a que aumentaran la capacidad y reforzaran los conocimientos de las autoridades nacionales en relación con la ciberdelincuencia y las unidades de investigación financiera mediante una formación especializada.

44. En el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, los participantes en la Reunión propusieron también que se difundieran modelos cooperativos nacionales que permitieran planificar políticas públicas para hacer frente a la corrupción y el blanqueo de dinero.

45. En la Reunión se recomendó que la UNODC, de conformidad con su mandato, siguiera prestando asistencia técnica a los países de la región cuando la solicitaran, a fin de aumentar la capacidad y los conocimientos de las autoridades centrales y los profesionales del sector en la cooperación internacional en asuntos penales, en especial la extradición, la asistencia judicial recíproca y la cooperación internacional para fines de decomiso, incluida la recuperación de activos, y la cooperación para luchar contra el blanqueo de dinero. Además, se instó a la UNODC a que recopilara y difundiera, en cooperación con las instituciones nacionales con experiencia en la elaboración de sondeos y datos estadísticos sobre justicia penal, información sobre los marcos institucionales y los requisitos legales nacionales relativos a la cooperación internacional. La UNODC debía también examinar formas de facilitar el establecimiento de cauces seguros de comunicación entre las autoridades centrales y el intercambio de información entre los Estados interesados.

46. A fin de aplicar más eficazmente la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y los 18 instrumentos jurídicos universales de lucha contra el terrorismo, los participantes en la Reunión recomendaron que los Estados Miembros examinaran los ordenamientos jurídicos y prácticas nacionales respecto de las cuestiones de la asistencia judicial recíproca y la extradición, con miras a homologar sus leyes con lo dispuesto en los correspondientes instrumentos internacionales, establecer autoridades nacionales centrales competentes dotadas de recursos y personal suficientes para poder formular solicitudes de extradición y de asistencia judicial y responder a ese tipo de solicitudes.

47. En la Reunión se invitó a los Estados que aún no lo hubieran hecho a que incorporaran a su legislación nacional la tipificación de los crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, de conformidad con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, a fin de sentar las bases para la negociación de un tratado multilateral sobre la asistencia judicial recíproca y la extradición en los casos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.

48. En la Reunión se recomendó que los gobiernos y organismos internacionales articularan, promovieran y fortalecieran las redes especializadas de fiscales y policías, como herramienta efectiva para combatir la delincuencia organizada, la violencia contra las mujeres y los delitos ecológicos, entre otros; que se facilitara el funcionamiento de la cooperación internacional; y que se fortaleciera la cooperación técnica y económica en los ámbitos regional e internacional con el propósito de evitar y combatir la infiltración de la criminalidad organizada transnacional en los sistemas de administración de justicia.

49. Los países participantes recordaron el carácter humanitario del principio de la transferencia de personas condenadas, como forma de promover la reinserción del condenado en su ambiente familiar y social, previniendo así la reincidencia y la comisión de futuros delitos. En ese contexto, señalaron la importancia de ampliar la red de acuerdos internacionales para la transferencia de personas condenadas.

Instaron también al 13° Congreso a que estudiara formas de promover la difusión de ese concepto en lo referente a las personas privadas de libertad.

50. En la Reunión se propuso que el 13° Congreso incentivara el uso de medios electrónicos para acelerar las solicitudes de prisión y demás comunicaciones para fines de extradición, especialmente por medio de INTERPOL, mediante la revisión de la legislación o la celebración de instrumentos bilaterales o regionales.

51. Se propuso que el 13° Congreso incentivara la creación de redes regionales de fiscales, con miras a hacer más eficaz la lucha contra la delincuencia organizada, según el modelo de la Red de Fiscales contra la Delincuencia Organizada (REFCO) y de la red de autoridades centrales y fiscales de África occidental, con miras a examinar la conveniencia de una futura integración entre dichas redes.

52. En los esfuerzos por luchar contra la delincuencia transnacional, era preciso unificar políticas y estrategias a nivel regional, por lo que se propuso unificar la legislación penal y procesal penal, aunar recursos y capacidades a nivel de jueces, defensores, fiscales, policías y peritos, especialmente en procesos de capacitación y tecnología de punta, para responder en tiempo real a través de unidades especializadas que tuvieran acceso a información para la prevención y el combate de la delincuencia organizada, debiendo realizarse, entre otros, foros regionales que permitieran ofrecer una respuesta efectiva y eficaz.

53. Era importante unificar los procedimientos en América Latina y el Caribe para hacer más eficiente y ágil el proceso relativo a las solicitudes de asistencia judicial recíproca, así como los procedimientos de extradición, a fin de lograr los objetivos previstos.

54. Por otra parte, los participantes en la Reunión recomendaron las siguientes medidas:

- aumentar la colaboración en el ámbito de la asistencia judicial recíproca y la extradición y preparar protocolos, leyes y procedimientos para hacer más eficaces y eficientes los procesos de extradición y asistencia judicial recíproca;
- promover investigaciones conjuntas y el intercambio de información y pruebas para afrontar la delincuencia organizada transnacional de forma que incluso si los autores de delitos no pudieran ser perseguidos en un país, pudieran interrumpirse las operaciones de la red en otro país al perseguirse allí al grupo delictivo;
- promover la capacitación conjunta de los funcionarios dedicados a la lucha contra la trata de personas;
- establecer programas conjuntos de concienciación social dirigidos a objetivos específicos entre los países de origen y los países de destino, como medidas de prevención de delitos tales como la trata de personas;
- crear oportunidades de capacitación para los funcionarios judiciales y los fiscales en colaboración con los asociados regionales e internacionales;
- elaborar memorandos de entendimiento y acuerdos bilaterales y multilaterales para facilitar la acción contra la delincuencia organizada transnacional;
- fortalecer los programas recíprocos de protección de testigos para proteger a las víctimas de la trata de personas y otros testigos de la delincuencia organizada transnacional.

Seminario 2. La trata de personas y el tráfico de migrantes: éxitos registrados y problemas que plantean la penalización, la asistencia judicial recíproca y la protección eficaz de los testigos y las víctimas de la trata

56. En la Reunión se instó a los Estados Miembros a que preparasen una referencia uniforme para la tipificación, la persecución y la prevención del delito de trata, que permitiese luchar de forma eficaz contra ese delito de conformidad con los instrumentos y mejores prácticas internacionales específicos, y que a la vez promoviesen el carácter ilícito del tráfico sin tener en cuenta el consentimiento de la víctima y crearan oficinas especializadas para el rescate y acompañamiento de las personas afectadas.

57. En la Reunión se instó también a los Estados Miembros a que preparasen un modelo de atención integral para las víctimas del delito de trata de personas, que debería ser especializado y contar con un enfoque diferencial y transversal a fin de que abarcase las diversas formas en que podían verse afectadas las víctimas.

58. En la Reunión se exhortó a los Estados Miembros a intensificar el intercambio de información para permitir la identificación de organizaciones delictivas y determinar su movilidad y su *modus operandi* transnacional en la región.

59. En la Reunión se instó a los Estados Miembros a que alentasen la aprobación de mecanismos normativos a fin de prohibir la publicación de anuncios en que se promocionase la oferta de favores sexuales o se hiciese referencia explícita o implícita a la solicitud de personas para el comercio sexual, así como la creación de los organismos de vigilancia y control necesarios para ello, con objeto de prevenir el delito de la trata de personas con fines de explotación sexual y de colaborar en la eliminación progresiva de las diversas formas de discriminación contra la mujer.

60. En la Reunión se recomendó:

- homologar la normativa nacional en el marco del mandato internacional para hacer frente de manera integral al delito de la trata de personas;
- reforzar la coordinación regional e internacional para brindar asistencia a las víctimas sobrevivientes del delito de la trata de personas, procurando la restitución de sus derechos: a) regulación migratoria, b) protección, c) retorno seguro, c) reinserción e integración;
- fortalecer su cooperación para promover el intercambio de información a fin de aumentar las actividades de prevención, persecución y sanción del delito de trata de personas.

61. En la Reunión se expresó satisfacción con la proclamación del 30 de julio como Día Mundial contra la Trata de Personas de las Naciones Unidas el (recomendación de la Asamblea General de octubre de 2013) y se instó a que se promoviesen actividades relacionadas con ese tema.

62. En la Reunión se propuso la elaboración de un protocolo para la atención integral de las víctimas de la trata, que debía ser especializado y contar con un enfoque diferencial y transversal respecto de las diversas formas en que podían verse afectadas las víctimas.

63. En la Reunión se recomendó:

- trabajar en la elaboración de una referencia uniforme para la tipificación, la persecución y la prevención del delito de trata para los países de América Latina, que permitiese combatir eficazmente la delincuencia organizada transnacional;
- trabajar en la elaboración de un modelo de atención integral para las víctimas de la trata, que debía ser especializado, con un enfoque diferencial y transversal, en que se observaran las diversas formas en que podían verse afectadas las víctimas, lo cual se traduciría en el enjuiciamiento eficaz de los delincuentes;
- fortalecer los vínculos de cooperación e intercambio de buenas prácticas en lo que respectaba a los planes de atención, protección y retorno ordenado de las víctimas;
- intensificar las labores de inteligencia y el intercambio de información que permitiesen identificar a las víctimas de la trata y determinar su vínculo con las organizaciones delictivas y la movilidad transnacional y el *modus operandi* de dichas organizaciones en la región.

3. Tema 5 del programa del Congreso: Enfoques amplios y equilibrados para prevenir y afrontar adecuadamente formas nuevas y emergentes de delincuencia transnacional

64. En la Reunión se recomendó formular y desarrollar estrategias y técnicas para combatir la delincuencia organizada, estableciendo metas concretas encaminadas a dismantelar organizaciones, condenar a sus miembros o decomisar los bienes fruto de actividades ilícitas. En el marco de esas estrategias y técnicas se consideró conveniente la especialización de los funcionarios, la infiltración en las organizaciones, la reestructuración de las instituciones y, sobre todo, la eliminación de obstáculos jurídicos o reglamentarios.

65. En la Reunión se recomendó:

- armonizar la legislación, lo que permitiría identificar instrumentos penales y procesales para combatir la delincuencia organizada, estableciendo los mínimos de penas en función de tipos penales de base entre los que cabría enumerar el tráfico de armas, la asociación ilícita, la trata de personas, el tráfico de drogas, la legitimación de capitales, el tráfico de influencias y la corrupción, entre otros; e
- instaurar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la orden de captura con aplicación regional, los investigadores encubiertos, el decomiso internacional de bienes, el levantamiento del secreto bancario, la transferencia de pruebas, el registro único de delincuentes en la región, el hemisferio y a nivel internacional; también resultaba necesario fortalecer la vigilancia transfronteriza y la protección de víctimas y testigos mediante acuerdos migratorios comunes.

66. En la Reunión se recomendó a los gobiernos que adoptaran medidas para crear un entorno cibernético seguro y resistente, a fin de prevenir la actividad terrorista que pudiese realizarse a través de Internet y las redes sociales. Entre dichas medidas se encontraban la aplicación de un marco de gobernanza global, la promulgación de legislación adecuada sobre delincuencia cibernética, en que se abordaran, entre otras cuestiones, la investigación, la tipificación y la persecución de los delitos relacionados con la delincuencia informática y cibernética, y la sensibilización de todos los interesados (gobiernos, empresas, instituciones académicas, sociedad civil

y ciudadanos) acerca de su función y sus responsabilidades para instaurar unas TIC seguras. En la Reunión se resaltó además la importancia de continuar con la labor en el marco del Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal a fin de establecer mecanismos de cooperación internacional para obtener y mantener pruebas electrónicas, y en que se tuviese en cuenta la necesidad de respetar los derechos humanos, la privacidad, la libertad de expresión y de asociación, el acceso al conocimiento y la presunción de inocencia.

67. En la Reunión se recomendó:

- aplicar un marco nacional de gobernanza global;
- promulgar legislación adecuada sobre delincuencia cibernética en que se abordasen, entre otras cuestiones, la investigación, la tipificación y la persecución de los delitos relacionados con la delincuencia informática y cibernética;
- sensibilizar a todas las partes interesadas (gobiernos, empresas, instituciones académicas, sociedad civil y ciudadanos) acerca de su función y sus responsabilidades para instaurar unas TIC seguras; y
- reafirmar el compromiso o la determinación de los países de cooperar y colaborar en los planos bilateral, regional e internacional, junto con las organizaciones internacionales pertinentes para afrontar esta cuestión.

68. En la Reunión se destacó también la importancia de proseguir los trabajos en el marco de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal como contribución a la negociación de un instrumento global para la lucha contra el delito cibernético a fin de establecer mecanismos ágiles de cooperación internacional para la obtención y preservación de pruebas electrónicas, y en que se tomase en cuenta la necesidad de respetar los derechos humanos, la privacidad, la libertad de expresión y de asociación, el acceso al conocimiento y la presunción de inocencia.

69. Resultaba fundamental emprender la labor de armonización normativa entre los países de la región para materializar medidas concretas de cooperación internacional al respecto, puesto que constituía una forma de delincuencia transfronteriza. Esa labor había de abordarse en los siguientes niveles:

- nivel sustantivo: los países de la región debían tipificar las diversas formas de delincuencia cibernética a fin de posibilitar la cooperación internacional y, en particular, la extradición, sobre la base del principio de doble incriminación.
- A nivel procesal: estableciendo reglas sobre jurisdicción y competencia para el enjuiciamiento de la delincuencia cibernética en relación con los Estados afectados.
- A nivel administrativo: formulando obligaciones para los Estados y las entidades públicas o privadas, en particular en lo que respecta a preservar los datos de naturaleza informática durante el tiempo necesario para que pudieran emplearse durante el proceso.
- A nivel informático: estableciendo confidencialidad e integridad de sistemas, redes y datos informáticos, y elaborando un glosario de términos de carácter informático que fueran inherentes a la delincuencia cibernética pero que, por lo general, fueran desconocidos para los operadores del sistema de justicia penal.

84 *bis*. Considerando que en la actualidad existían diversas plataformas de intercambio de experiencias para optimizar la prevención y el persecución del

delito, tanto a nivel gubernamental como policial, a través de instancias como la INTERPOL y la AMERIPOL, se recomendó mantener el compromiso de avanzar en el fortalecimiento de la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia organizada, nacional y transnacional, la corrupción y el terrorismo, en los planos multilateral (Naciones Unidas), regional (Organización de los Estados Americanos) y bilateral, conforme a las normas del derecho internacional.

84 *ter.* Igualmente, se recomendó la incorporación de los servicios nacionales de aduanas, en su calidad de servicios públicos de frontera, en la lucha activa contra los delitos transnacionales, junto con la policía y las fiscalías.

84 *quater.* Se recomendó también internalizar la normativa internacional para mejorar los procedimientos en relación con la trata de personas y el tráfico ilícito de personas indocumentadas. Asimismo, se recomendó dar prioridad a la lucha global contra el terrorismo, al ratificar alrededor de 12 convenciones de las Naciones Unidas y la Convención Interamericana contra el Terrorismo (Organización de los Estados Americanos).

Finalmente, se sugirió que se fortalecieran y optimizaran los siguientes elementos fundamentales en la prevención del delito y el enjuiciamiento penal:

- capacitación;
- cooperación interinstitucional;
- intercambio de información y de buenas prácticas;
- reuniones temáticas (entre otras cosas, sobre asuntos penales);
- análisis criminológico permanente del fenómeno criminal; y mantenimiento de una plataforma de consulta sobre la criminalidad en la región.

Seminario 3. Fortalecimiento de las respuestas de prevención del delito y justicia penal frente a las formas de delincuencia en evolución, como la ciberdelincuencia y el tráfico de bienes culturales, incluidas las lecciones aprendidas y la cooperación internacional

70. En la Reunión se fijaron como prioridades para la región de América Latina y el Caribe las siguientes formas nuevas e incipientes de delincuencia transnacional: la ciberdelincuencia, el tráfico de bienes culturales, el tráfico de órganos, el delito ambiental y el uso fraudulento de documentos con fines de tráfico ilícito de migrantes. A ese respecto, se recomendó que los Estados Miembros elaboraran métodos de investigación criminal para luchar contra las nuevas formas de delincuencia; alentaran la adopción de instrumentos de medición que permitieran formular mejores políticas públicas orientadas a prevenir las nuevas formas de delincuencia organizada transnacional; determinaran los rasgos típicos de los delincuentes, los factores socioeconómicos y estructurales de esas formas de delincuencia y la medida en que la corrupción facilitaba dichas nuevas formas de delincuencia.

71. En la Reunión también se señaló que un nuevo factor que dificultaba la labor de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, incluidas las encargadas de la justicia penal, era el rápido aumento de los homicidios, los feminicidios, los secuestros y la extorsión, y se exhortó a los Estados de la región a que adoptaran medidas adecuadas para afrontar ese fenómeno de la forma más eficaz posible.

72. El tráfico ilícito de bienes culturales se ha considerado como una forma nueva y emergente de delincuencia; no obstante, en muchos países de América Latina desde hace años se sufre el expolio de bienes, si bien muchos países no cuentan *a priori* con los registros que acrediten la propiedad de los mismos. El principio de la carga de la prueba, poseedor de buena fe, o el no considerar como delito la realización de estas conductas, dificulta la recuperación de los bienes culturales ilegalmente extraídos de sus respectivos países. Para combatir estos delitos, se propone a la Asamblea promover las siguientes medidas entre los Estados Miembros: establecer controles más exhaustivos en las zonas aduaneras nacionales, establecer mecanismos más ágiles de cooperación jurídica; dar atención y respuesta expedita a la asistencia jurídica solicitada; pedir a la UNESCO una participación más activa en la materia, así como impulsar acuerdos internacionales sobre recuperación y repatriación de los bienes culturales, y poner en marcha la práctica de directrices sobre las respuestas en materia de prevención del delito y justicia penal con respecto al tráfico de bienes culturales (aprobadas por la UNODC en enero de 2014), en particular las relativas a registros nacionales.

4. Tema 6 del programa del Congreso: Enfoques nacionales de la participación pública en el fortalecimiento de la prevención del delito y la justicia penal

73. En la Reunión se reconoció la necesidad de que la sociedad participara en la comprensión de los problemas y tradiciones locales relativos a la delincuencia y la formulación de soluciones para fortalecer la seguridad y la justicia. A ese respecto, los participantes en la Reunión se mostraron muy a favor de colaborar con los jóvenes en unos procesos verdaderamente consultivos y participativos que contaran con ellos, en particular con los que se encontraran en riesgo de cometer o padecer delitos, como promotores de cambios positivos y agentes activos en el fortalecimiento de la prevención del delito y la justicia penal.

74. En la Reunión se invitó a los Estados Miembros a que asignaran más recursos a los programas de prevención del delito. Además, se les exhortó a que examinaran las buenas prácticas relativas al diseño y la aplicación de estrategias, planes y programas eficaces de prevención del delito, a nivel nacional y municipal, que aseguraran la inclusión social y propiciaran la participación de todos los círculos de la sociedad (sociedad civil, sector privado, instituciones de enseñanza y medios de información) para fortalecer el funcionamiento del sistema de justicia penal, así como los servicios que debían prestarse a las comunidades correspondientes.

75. En la Reunión se reconoció también la importancia de fortalecer la capacidad de los servicios de policía para realizar las funciones de policía de proximidad y policía comunitaria en estrecha colaboración con los ciudadanos a fin de hallar soluciones en pro de la prevención del delito y la violencia, en particular la violencia doméstica, la violencia en la carretera y la violencia en las comunidades vulnerables. Además, se destacó la importancia de adoptar medidas eficaces para prevenir y combatir el uso de armas de fuego como medio de reducir el número de homicidios en la región, incluso organizando y llevando a cabo campañas especiales con objeto de eliminar el uso ilícito de armas de fuego por civiles. Asimismo, en la reunión se exhortó a los Estados de la región a que reglamentaran y redujeran desencadenantes de la delincuencia como el consumo de alcohol y de drogas, desde una perspectiva amplia de salud pública.

76. En la Reunión se pidió a los Estados que integraran los sistemas de justicia alternativa y justicia restaurativa (por ejemplo, los centros de tratamiento de drogodependientes o los albergues para víctimas de violencia doméstica) para aumentar el grado de aceptación de esos sistemas por la comunidad. También se pidió a los Estados Miembros que apoyaran a las organizaciones cívicas de la región, en particular las organizaciones juveniles, para que participaran en mayor medida en la prevención del delito, y que impartieran capacitación a esas organizaciones en materia de lucha contra la delincuencia organizada. A ese respecto, los asistentes se expresaron a favor de idear campañas y cursos prácticos para alentar a la sociedad a denunciar los delitos que se cometieran en su seno y a hacer un seguimiento de esos delitos; establecer mecanismos para que los ciudadanos denunciaran e hicieran un seguimiento de casos particulares de corrupción o de violación de la legalidad; y organizar campañas para concienciar acerca de la importante función que los ciudadanos podían desempeñar en el fortalecimiento de la prevención del delito y la justicia penal.

77. Reconociendo que los testigos, los denunciantes de delitos y los jueces a menudo sufrían intimidación y amenazas físicas o incluso eran asesinados, los participantes en la Reunión recomendaron que se fortalecieran los programas de protección de testigos, según procediera, como medida para alentarlos a cumplir su deber de denunciar, lo que contribuiría también a aumentar la eficacia de la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada y a promover la participación de la sociedad en el sistema de justicia penal.

78. En la Reunión se instó a los Estados Miembros a que promovieran la adopción de programas innovadores y, cuando correspondiera, su fortalecimiento, para gestionar el conflicto social mediante mecanismos de participación comunitaria orientados a la reconstrucción de las relaciones en los vecindarios y la prevención de la violencia y la delincuencia.

79. En la Reunión se recomendó:

- Propiciar e impulsar entre los Estados el análisis, revisión, creación y reforma de las leyes que imponían sanciones privativas de libertad, conforme a las situaciones de vulnerabilidad y riesgo social en que se encontraban mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas procedentes de pueblos indígenas, de ascendencia africana y personas menores de edad y adolescentes, bajo un criterio de interseccionalidad.
- Propiciar e impulsar entre los Estados reformas legales con perspectiva de género, para la disminución de penas de sanciones privativas de libertad, entre ellos, en delitos relacionados con la introducción de drogas a los centros penales por parte de mujeres en condiciones de vulnerabilidad y riesgo social, extrema pobreza o con hijos menores de edad; personas dependientes adultas mayores; personas dependientes con discapacidad, y víctimas de violencia doméstica, coacción o amenaza, circunstancias que habrían determinado la comisión del delito.
- Propiciar e impulsar entre los Estados la desinstitucionalización como estrategia para enfrentar los problemas de la sobrepoblación en los sistemas penitenciarios con la creación de diferentes modalidades de custodia que permitan el control y seguimiento en el cumplimiento de las penas y sanciones.
- Propiciar e impulsar entre los Estados el respeto y acceso a los derechos de la población privada de libertad, específicamente la diversidad sexual.
- Asignar los presupuestos necesarios a los sistemas penitenciarios, para que las penas privativas de libertad se cumplan en centros que brinden el reconocimiento y la atención de las necesidades específicas de las poblaciones adscritas, con respeto a los derechos humanos de las personas reclusas y del personal penitenciario.
- Propiciar entre los Estados la creación de penas alternativas distintas a la prisión, como el arresto domiciliario o dispositivos de vigilancia electrónica, tomando en consideración a las mujeres en condición de vulnerabilidad, las personas adultas mayores, las personas pertenecientes a pueblos indígenas y las personas con discapacidad.
- Propiciar el uso racional de la prisión preventiva, en estricto respeto del principio de proporcionalidad como límite a la potestad punitiva del Estado.
- Propiciar la implementación de sistemas de información que permitan obtener datos cualitativos y cuantitativos para el desarrollo de las políticas públicas de los Estados en materia criminológica.
- Formular políticas públicas para el acceso a la justicia e integración social para las mujeres vinculadas al sistema penitenciario tomando en cuenta la interseccionalidad y los familiares dependientes en condiciones de vulnerabilidad.
- Promover que los programas de justicia restaurativa sean utilizados a lo largo de todo el proceso judicial: en la investigación, en la determinación judicial de la pena y en el proceso judicial de la sanción, en el que la persona imputada, las víctimas y la comunidad (entendida esta última como recursos de apoyo familiar, comunal e institucional) construyen acuerdos orientados a reparar el daño a la víctima según las medidas alternas que corresponda, con la sociedad civil organizada en redes de apoyo, disminuyendo de esa manera el índice de reincidencia y los costos.

- Unificar el criterio a nivel regional, en cuanto a establecer el límite de los plazos razonables de la prisión preventiva, con la finalidad de evitar las facultades de los órganos jurisdiccionales de prorrogar la prisión constantemente y sin límite, a los privados de libertad sin condena.
- Dar cumplimiento a las resoluciones de la Organización de los Estados Americanos, respecto al fortalecimiento de las defensorías públicas y su ampliación a la atención integral a los grupos en condición de vulnerabilidad, propiciando como política regional la atención de las víctimas de violencia intrafamiliar o doméstica a través de la asistencia jurídica gratuita por medio de los defensores públicos.
- Crear observatorios nacionales que registren los casos de muertes violentas por armas de fuego que permitan obtener datos confiables que contribuyan a la formulación de políticas regionales de tratamiento, prevención y reducción de la violencia armada.

78 *bis*. Finalmente, en la Reunión se recomendó que:

- El 13° Congreso considerara en sus debates, en forma priorizada, la prevención como instrumento principal de las estrategias de lucha contra el delito, basadas en programas de inclusión social y económica que permitieran reducir las desigualdades sociales, el hambre y la pobreza, en especial en los sectores más vulnerables (jóvenes, niños, grupos en situación de discapacidad, pueblos originarios y grupos de ascendencia africana).
- Se considerara la necesidad de que esos programas de prevención contaran con los recursos financieros, aportados en primer lugar por los Estados, y de que las acciones y programas emprendidos en materia de prevención fueran objeto de evaluación periódica sobre su efectividad a fin de sentar las bases para el intercambio de información de buenas prácticas, a partir de diagnósticos con datos robustos y comparables.
- Se considerara la posibilidad de hacer participar a los organismos nacionales de estadística para fortalecer o generar métodos para el desarrollo de indicadores e información estadística a ese respecto.
- Se considerara también la necesidad de promover la adopción y, en su caso, el fortalecimiento, de programas innovadores de gestión de la conflictividad social mediante mecanismos de participación comunitaria orientados a la recomposición de las relaciones vecinales y a la prevención de la violencia y el delito.

Seminario 4. La contribución pública a la prevención del delito y la promoción del conocimiento de la justicia penal: experiencias y lecciones aprendidas

80. En la Reunión se formularon las siguientes recomendaciones:

- Generar un debate con miras a superar los modelos de justicia fragmentados para promover una justicia integrada, apoyada en equipos interdisciplinarios, y con participación de la sociedad civil;
- Promover y potenciar las salidas alternativas bajo una sostenida supervisión judicial, poniendo en el centro de la discusión la participación comunitaria tendiente a robustecer y sacar mejor rendimiento al trabajo de los tribunales de justicia;

- Promover y potenciar el debate sobre las reformas estructurales necesarias para que el sistema de justicia penal pueda dar respuestas integrales a los problemas de seguridad ciudadana, como el de la violencia intrafamiliar, por ejemplo.

82. En la Reunión se recomendó también que los Estados Miembros reconocieran y evaluaran la función de los medios de información tradicionales y nuevos en la elaboración de políticas y programas para fortalecer la prevención del delito y la justicia penal, y en ese sentido, se alentó a los Estados Miembros a que intercambiaran mejores prácticas e información sobre las alianzas público-privadas en materia de prevención del delito y justicia penal, así como la gran importancia que revestían la educación y la participación de los jóvenes.

83. En la Reunión se hizo hincapié en la importancia de elaborar programas de formación en estado de derecho y derechos humanos y se recomendó que los Estados Miembros siguieran promoviendo y fortaleciendo esos programas tanto para aumentar la conciencia social como para asegurar la plena confianza en la supremacía de la ley y el correcto funcionamiento de la administración de justicia.

B. Otros asuntos

84. El representante del Brasil recordó la Declaración de Salvador, aprobada en el 12º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, que se celebró en el Brasil en 2010, y destacó que esa Declaración dio un gran impulso al debate sobre políticas eficaces en el ámbito de la prevención del delito y la justicia penal. El representante del Brasil también destacó que en la Declaración de Salvador se hacía referencia específicamente a la necesidad de respetar y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales en la prevención del delito, la administración de justicia penal y el acceso a la justicia penal y, además, se reconocía la importancia fundamental que tenían la prevención del delito y el sistema de justicia penal para el estado de derecho y que el desarrollo sostenible a largo plazo y el establecimiento de un sistema de justicia penal debidamente operativo y humano tenían unos efectos recíprocos positivos.

85. El observador de Qatar, país anfitrión del 13º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, presentó una ponencia sobre el estado de los progresos en la labor necesaria para garantizar unos preparativos oportunos y eficientes del Congreso. En particular, presentó la página web del 13º Congreso, que había sido inaugurada por el Primer Ministro de Qatar a principios de febrero de 2014.

86. El representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) hizo una breve exposición del Informe Regional de Desarrollo Humano correspondiente al período 2013-2014, titulado Seguridad ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina. En él se ofrecía una visión regional de la seguridad ciudadana en los 18 países de la América Latina continental y la República Dominicana. En el informe no se incluían los países del Caribe de habla inglesa, puesto que su situación se había analizado en el Informe sobre el Desarrollo Humano del PNUD sobre el cambio hacia una seguridad ciudadana mejor, publicado en 2012. La conclusión básica del informe es que no existía una única fórmula mágica para resolver el problema, pero que se podía poner remedio a la inseguridad. Las experiencias y lecciones extraídas de la región de América

Latina deberían tenerse en cuenta para hacer frente a las dificultades conexas, y la eficacia y los efectos de la políticas en materia de seguridad debían evaluarse periódicamente.

87. El representante del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco presentó las disposiciones y el sistema de vigilancia del Convenio y de su Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco. El Convenio Marco se aprobó en 2003 y entró en vigor el 27 de febrero de 2005. En el Protocolo se ampliaba y complementaba el artículo 15 del Convenio Marco, en el que se exponían los modos de combatir el tráfico ilícito de productos de tabaco.

88. El Director del Comité Permanente para América Latina del Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente hizo referencia a los programas de inclusión social y reducción de la pobreza en la región que habían tenido un efecto positivo en la reducción de la delincuencia. Expresó su apoyo por la continuación de actividades de capacitación conjuntas para profesionales de diferentes sectores del sistema de justicia penal, la policía y el sistema penitenciario, que podrían realizarse de modo paralelo a los programas de reinserción social de los delincuentes.

III. Asistencia y organización de los trabajos

A. Fecha y lugar de celebración de la Reunión

89. La Reunión Preparatoria Regional de América Latina y el Caribe para el 13º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal se celebró en San José del 19 al 21 de febrero de 2014.

B. Asistencia

90. Estuvieron representados en la Reunión los siguientes Estados miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Honduras, Italia, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).

91. Qatar estuvo representado en la Reunión por observadores.

92. Estuvieron representadas por observadores las siguientes entidades del sistema de las Naciones Unidas: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

93. Los siguientes institutos de la red del programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal estuvieron representados por observadores: Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente/Comité Permanente para América Latina, Centro Internacional de Reforma del Derecho Penal y de Política de la Justicia Penal,

Consejo Consultivo Internacional Científico y Profesional, Instituto Raoul Wallenberg.

94. Estuvieron representadas por observadores las siguientes organizaciones intergubernamentales: Conferencia de Ministros de Justicia de los Países de Iberoamérica, Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Organización de los Estados Americanos (OEA), Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco.

95. Estuvieron representadas por observadores las siguientes organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social: American Society of International Law (ASIL), Intercambios, Sociedad Internacional de Criminología, Sociedad Mexicana de Criminología, Sociedad Mundial de Victimología.

96. Durante la Reunión se distribuyó una lista de participantes con la signatura A/CONF.222/RPM.3/INF/2.

C. Apertura de la Reunión

97. El 19 de febrero de 2014, declaró abierta la Reunión Preparatoria Regional de América Latina y el Caribe para el 13º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal la Excm. Sra. Ana Isabel Garita, Ministra de Justicia y Paz de Costa Rica. Hicieron declaraciones introductorias la Excm. Sra. Ana Isabel Garita, Ministra de Justicia y Paz de Costa Rica, y el Secretario de la Reunión Preparatoria Regional.

98. La Excm. Sra. Ana Isabel Garita, Ministra de Justicia y Paz de Costa Rica, dio la bienvenida a los participantes y destacó que la numerosa asistencia a la Reunión demostraba el compromiso de los países de la región de esforzarse por fortalecer la administración de justicia y promover el estado de derecho. La Ministra hizo referencia a la historia de los congresos de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y justicia penal y destacó su importante contribución a la fijación de normas y formulación de políticas a nivel internacional en el ámbito de la prevención del delito y la justicia penal. Se refirió asimismo a las políticas nacionales de prevención del delito y promoción de la inclusión social y destacó los componentes de esas políticas orientados a proteger a los niños y los jóvenes, prevenir el delito mediante campañas de comunicación, promover la justicia restaurativa y fortalecer la capacidad de los gobiernos locales. Además, subrayó la activa participación de Costa Rica en los planes y arreglos regionales y subregionales de cooperación internacional en asuntos penales. La Ministra también destacó los efectos perjudiciales que tenían las formas nuevas e incipientes de delincuencia, como los delitos cibernéticos y los delitos contra la intimidad y los datos personales de los ciudadanos, así como los delitos que iban en aumento, como los homicidios y feminicidios. Por último, la Ministra consideró la fase preparatoria del 13º Congreso, así como el Congreso en sí, como una oportunidad para que la comunidad internacional estudiara los efectos que el recurso excesivo a la detención tenía sobre el hacinamiento en las prisiones.

99. En sus declaraciones introductorias, el representante de la UNODC, hablando en nombre del Director Ejecutivo, destacó que la comunidad internacional estaba prestando cada vez más atención a la agenda para el desarrollo después de 2015 y que a nivel internacional había cada vez más conciencia de que la debilidad del estado de derecho y la delincuencia transnacional eran amenazas importantes para el desarrollo social y económico y dificultaban la capacidad de los Estados de alcanzar progresos en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En ese contexto, cabía destacar que, si bien la filosofía y planificación del desarrollo se había centrado tradicionalmente en los indicadores económicos y de empleo, el medio ambiente, la salud y la educación, en los últimos años se había producido un cambio y se estaba reconociendo cada vez más que el estado de derecho era tanto un resultado como un motor del desarrollo. Se hizo referencia al volumen general anual de flujos financieros derivado de la delincuencia organizada transnacional, que ascendía a unos 870.000 millones de dólares de los Estados Unidos, y al hecho de que los grupos delictivos explotaban constantemente las fuerzas positivas de la globalización y la integración para aumentar su actividad ilícita.

100. Por último, el orador recordó la función que históricamente habían desempeñado los congresos de las Naciones Unidas para impulsar el debate sobre problemas de actualidad y dar a los Estados la oportunidad de examinar normas y políticas internacionales en el ámbito de la prevención del delito y la justicia penal. Desde ese punto de vista, subrayó que el 13º Congreso y sus Reuniones Preparatorias Regionales representarían una oportunidad única para que los Estados Miembros contribuyeran activamente a la agenda para el desarrollo después de 2015 y estudiaran medidas globales y equilibradas para prevenir y responder a las formas de delincuencia nuevas e incipientes y a los problemas que surgieran en el ámbito de la justicia penal.

101. El Secretario de la Reunión Preparatoria Regional ofreció una breve explicación de los preparativos sustantivos que se estaban efectuando con miras al Congreso y de la labor que se había llevado a cabo en las dos primeras Reuniones Preparatorias Regionales que se habían celebrado en las regiones de Asia y el Pacífico y Asia Occidental, respectivamente. Recordó que la Asamblea General había determinado y aprobado el tema del 13º Congreso, los temas de su programa y el contenido de los seminarios con especial detenimiento, con miras a incorporar la labor y las deliberaciones del Congreso, la única conferencia mundial sobre asuntos relativos a la prevención del delito y la justicia penal, a la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo y las deliberaciones posteriores a 2015. A ese respecto, subrayó que el tema del Congreso, sus temas sustantivos y sus seminarios estaban estrechamente interrelacionados de manera de reforzarse mutuamente. Con miras a reflejar ese estrecho vínculo entre los temas sustantivos y el contenido de los seminarios, se proponía agrupar las deliberaciones del siguiente modo:

a) El tema sustantivo 3 (“Éxitos y problemas en la aplicación de políticas y estrategias amplias de prevención del delito y justicia penal para promover el estado de derecho a nivel nacional e internacional y para apoyar el desarrollo sostenible”) con el seminario 1 (“La función de las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal en apoyo de sistemas de justicia penal eficaces, imparciales, humanos y responsables: experiencias y lecciones aprendidas al atender las necesidades singulares de las mujeres y los niños, en particular el tratamiento y la reinserción social del delincuente”);

b) El tema sustantivo 4 (“Cooperación internacional, incluso a nivel regional, para combatir la delincuencia organizada transnacional”) con el seminario 2 (“La trata de personas y el tráfico de migrantes: éxitos registrados y problemas que plantean la penalización, la asistencia judicial recíproca y la protección eficaz de los testigos y las víctimas de la trata”);

c) El tema sustantivo 5 (“Enfoques amplios y equilibrados para prevenir y afrontar adecuadamente formas nuevas y emergentes de delincuencia transnacional”) con el seminario 3 (“Fortalecimiento de las respuestas de prevención del delito y justicia penal frente a las formas de delincuencia en evolución, como la ciberdelincuencia y el tráfico de bienes culturales, incluidas las lecciones aprendidas y la cooperación internacional”);

d) El tema sustantivo 6 (“Enfoques nacionales de la participación pública en el fortalecimiento de la prevención del delito y la justicia penal”) con el seminario 4 (“La contribución pública a la prevención del delito y la promoción del conocimiento de la justicia penal: experiencias y lecciones aprendidas”).

D. Elección de la Mesa

102. En su primera sesión, celebrada el 19 de febrero de 2014, la Reunión eligió por aclamación a los siguientes integrantes de la Mesa:

- Presidente:* Excm. Sra. Ana Isabel Garita, Ministra de Justicia y Paz (Costa Rica)
- Vicepresidentes:* Excmo. Sr. Carlos Romero Bonifaz, Ministro de Gobierno (Estado Plurinacional de Bolivia) y Sr. Elías Rafful Vadillo, Titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (México)
- Relator:* Excmo. Sr. Edward Belfort, Ministro de Justicia y Policía (Suriname)

E. Aprobación del programa y organización de los trabajos

103. También en su primera sesión, la Reunión aprobó el siguiente programa provisional (A/CONF.222/RPM.3/L.1):

1. Apertura de la Reunión.
2. Elección de la Mesa.
3. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización.
4. Temas sustantivos del programa del 13° Congreso:
 - a) Éxitos y problemas en la aplicación de políticas y estrategias amplias de prevención del delito y justicia penal para promover el estado de derecho a nivel nacional e internacional y para apoyar el desarrollo sostenible;

- b) Cooperación internacional, incluso a nivel regional, para combatir la delincuencia organizada transnacional;
 - c) Enfoques amplios y equilibrados para prevenir y afrontar adecuadamente formas nuevas y emergentes de delincuencia transnacional;
 - d) Enfoques nacionales de la participación pública en el fortalecimiento de la prevención del delito y la justicia penal.
5. Temas que se tratarán en los seminarios organizados en el marco del 13° Congreso:
- a) La función de las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal en apoyo de sistemas de justicia penal eficaces, imparciales, humanos y responsables: experiencias y lecciones aprendidas al atender las necesidades singulares de las mujeres y los niños, en particular el tratamiento y la reinserción social del delincuente;
 - b) La trata de personas y el tráfico de migrantes: éxitos registrados y problemas que plantean la penalización, la asistencia judicial recíproca y la protección eficaz de los testigos y las víctimas de la trata;
 - c) Fortalecimiento de las respuestas de prevención del delito y justicia penal frente a las formas de delincuencia en evolución, como la ciberdelincuencia y el tráfico de bienes culturales, incluidas las lecciones aprendidas y la cooperación internacional;
 - d) La contribución pública a la prevención del delito y la promoción del conocimiento de la justicia penal: experiencias y lecciones aprendidas.
6. Recomendaciones relativas al 13° Congreso.
7. Aprobación del informe de la Reunión.
104. En la misma sesión, la Reunión aprobó la organización de sus trabajos. La lista de los documentos que tuvo ante sí la Reunión figura en el anexo II.

IV. Aprobación del informe y clausura de la Reunión

105. En su sexta sesión, celebrada el 21 de febrero de 2014, la Reunión examinó y aprobó su informe (A/CONF.222/RPM.3/L.2) [en su forma oralmente enmendada].

Anexo I

Lista de documentos

A/CONF.222/PM.1	Guía para las deliberaciones
A/CONF.222/RPM.3/L.1	Programa provisional anotado
A/CONF.222/RPM.3/L.2	Proyecto de informe
A/CONF.222/PM/CRP.1	TST Issues Brief: Conflict Prevention, Post-conflict Peacebuilding and the Promotion of Durable Peace, Rule of Law and Governance
A/CONF.222/PM/CRP.2	Accounting for Security and Justice in the Post-2015 Development Agenda
